

AGENDA CIUDADANA

CHIAPAS, GUERRA EN VILO

Lorenzo Meyer

Cambio y Violencia.

Es un hecho histórico tan desafortunado como contundente: a partir de 1810, todo cambio político significativo en México ha tenido que hacerse por la vía de la violencia -independencia, Reforma y Revolución-, pues las instituciones y voluntades que hubieran permitido el cambio pacífico no existían o fallaron. De nueva cuenta y desde hace tiempo, México está inmerso en un proceso de cambio que puede y debe ser de fondo: el tránsito del autoritarismo postrevolucionario a la democracia política. En estas circunstancias, y teniendo a Chiapas como trasfondo, la pregunta es inevitable: ¿también hoy la energía que nos lleve de la orilla que debemos abandonar a la que debemos llegar, tiene que provenir de la violencia?.

El cambio político que implica la actual transición mexicana, ha sido incompleto, particularmente lento, frustrante, lleno de contradicciones y ambigüedades. Este proceso se inició hace más de un cuarto de siglo y ya ha exigido una cuota de sangre; ahí están, como trágico rastro, Ciudad Madera, el 2 de octubre, el jueves de corpus, las montañas de Guerrero, los desaparecidos que doña Rosario Ibarra insiste en encontrar, los casi tres centenares de perredistas muertos y, finalmente, los diez días de guerra en Chiapas. El cambio, cuando se de, ya no podrá ser incruento, pero la cuota de sangre aún puede incrementarse.

Es esta última posibilidad la que ha aumentado ahora que formalmente la tregua en la selva chiapaneca se ha suspendida por una de las partes en conflicto, la más débil militarmente pero con el reclamo más fuerte. No es inevitable que la historia se vuelva a repetir; lo que fue no tiene que volver a ser; nuestro destino colectivo no está escrito de antemano; podemos y debemos cambiar pacíficamente; requerimos de una nueva cultura cívica, con menos héroes trágicos y resultados más prácticos.

Por sus comunicados, cartas y acciones de los últimos días, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) da por sentado que la lucha armada que inició contra el régimen el 1° de enero, y que se detuvo tras diez días de combate, se va a reanudar. Es posible que así suceda, y en tal caso también es previsible el desenlace en el corto plazo, aunque no en el largo. Ahora bien, resulta que en este drama no hay sólo dos actores -zapatistas y gobierno- sino tres. El tercero somos nosotros, el grueso de la sociedad mexicana, que tenemos un papel que desempeñar y no precisamente de meros espectadores.

Desafortunadamente, ese tercer actor del drama esta lejos de tener una posición clara. Y es precisamente esa ambigüedad, lo que ha llevado a que los otros dos se estén acercando al choque frontal. De ocurrir este, sus efectos van a influir en la relación futura entre gobierno y sociedad y en la naturaleza de la transición mexicana.

Los Zapatistas.

El zapatismo chiapaneco es un movimiento singular. Por una parte, se trata de una rebelión indígena, pues surgió en una zona

y en una cultura dominada por las comunidades indígenas. Por otra parte, es también un movimiento nacional., pero lo que le da al EZLN un carácter *sui generis*, no es su carácter indígena ni menos su decisión de emplear las armas para defender lo que considera derechos legítimos. No, lo peculiar del neozapatismo es que desde un principio enarboló con efectividad una bandera que no era local, ni particular, sino general: derechos de las minorías, democracia y justicia. Es verdad que los rebeldes chiapanecos hacen demandas muy relacionadas con los problemas campesinos del lugar -tierra, crédito, educación, salud, respeto y autonomía-, pero las hacen no únicamente por y para ellos, sino en nombre de todos los campesinos e indígenas mexicanos. Pero lo más notable es que hacen también demandas por y para todos los ciudadanos mexicanos y para todos los demócratas, independientemente de clase, raza e incluso nacionalidad: respeto a las garantías y derechos constitucionales, respeto a los derechos humanos, conformación de un auténtico sistema de partidos terminando con el régimen de partido de Estado, equilibrio de poderes efectivo, transparencia de los procesos electorales.

La decisión de ligar una rebelión provocada por causas muy puntuales y aparentemente locales con el proceso político y los valores nacionales e internacionales, fue uno de los elementos que permitió a la insurrección zapatista trascender desde el principio el marco regional para colocarse en el centro de la agenda nacional, ligarse a grupos y movimientos repartidos en toda la geografía mexicana, y establecer una credibilidad internacional.

El Poder Establecido.

El gobierno, asentado en un añejo régimen de partido de Estado, y representado en Chiapas por autoritarios tan conspicuos y desprestigiados como Absalón Castellanos y Patrocinio González -para mencionar únicamente a los recientes-, pudo haber sostenido en enero su contraataque contra los insurgentes. Si Carlos Salinas no continuó la guerra, fue porque le fallaron sus bases políticas y le faltó legitimidad a la represión. Los zapatistas se levantaron para contradecirlo, para mostrar lo falso de un discurso oficial que afirmaba que indígenas y campesinos -supuesta raíz y razón del poder- eran los hijos favoritos del régimen, y lo lograron.

La rebelión chiapaneca y lo terriblemente injusto del sistema que la incubó, puso de golpe en duda la proclamada modernidad de la tecnocracia mexicana, el cambio mexicano de civilización que se proclamó en las universidades americanas, el valor de la aceptación de México como miembro de la Asociación de Libre Comercio de la América del Norte y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Sin las justificaciones que la guerra fría dio a Luis Echeverría para llevar a cabo su guerra de exterminio contra la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero, Carlos Salinas -pese a una bien ganada fama de duro- debió humillarse y declarar una tregua frente a los pocos y mal armados zapatistas, una tregua exigida por una parte importante de la sociedad. Sin embargo, esa tregua y la negociación que le siguió, buscaron ganar para el presidente el tiempo necesario para reforzar al brazo armado del

gobierno -el ejército-, consolidar el cerco de la zona insurgente y llevar a buen fin el proceso de sucesión presidencial.

El sucesor de Salinas ha ofrecido prolongar la tregua, pero sus acciones tiene por objeto que el tiempo de la tregua corra en contra del EZLN. Para ello dio todo su apoyo a un gobierno local que es una restauración que se niega a decir su nombre, pues lo encabeza quien fuera pieza central en los gobiernos de Absalón Castellanos y Patrocinio González, justamente los gobiernos que resumen y simbolizan el agravio profundo por el que se rebelaron los zapatistas. Con ese gobierno en Chiapas, con una política presidencial de cooptación sistemática de la oposición a nivel nacional y local, con un cerco militar efectivo y un ejército reforzado -con efectivos 40 veces superiores a los zapatistas y un gasto que ya se acerca al del Programa de Solidaridad-, con un apoyo internacional para el gobierno reafirmado en la ceremonia del cambio de jefe del poder Ejecutivo, y con un debilitamiento de la oposición partidista, el EZLN parece haber concluido con un diagnóstico similar al de Ernesto Zedillo y los suyos: el tiempo está del lado del régimen.

El Tercer Actor.

La sociedad mexicana, tan heterogénea y tan dividida políticamente -el 50% apoya la permanencia del régimen y el 50% no- no tiene una reacción clara. Por un lado están los sectores indiferentes y distantes; un comentario escuchado en Monterrey resume bien la situación: "al ver por televisión los sucesos de Chiapas, me pareció estar viendo Discovery Channel". Por otro, están los intereses creados, esos que en nombre de la razón de

Estado y de la esencia del poder -el monopolio de la violencia legítima-, pero sobre todo en nombre del bien común -ese que sirve para arropar lo mismo los intereses de los millonarios de Forbes que los del cacique ramplón- piden que un inexistente Estado de Derecho se restaure en Chiapas, y que se reintegre el territorio arrancado por el zapatismo al seno del sistema, de su sistema. Si el costo es la violencia, que sea, pues el control de las comunicaciones masivas asegura que ese costo se cargará a la cuenta de la intransigencia de los que no quisieron "dar la cara" y no de los que entregaron Chiapas a un ex colaborador de Absalón y Patrocinio.

Los indiferentes y distantes, unidos a los oportunistas, autoritarios y conservadores, a los faltos de generosidad o imaginación, hacen muy difícil la acción de aquellos que buscan desarmar al zapatismo pero no suprimiéndolo, sino incorporándolo plenamente a la vida nacional por la vía de la superación efectiva del autoritarismo local primero y nacional después. Tras el nuevo triunfo del partido de Estado el 21 de agosto pasado, simplemente no parece haber una fuerza nacional capaz de obligar a las autoridades centrales a resolver el problema de la rebeldía zapatista por la vía del desmantelamiento del autoritarismo chiapaneco, pieza conspicua del autoritarismo general.

Hoy, la posibilidad de que no se proceda a la "solución final" de la rebelión indígena chiapaneca es menos la movilización nacional y más el que la élite política -civil y militar- haya asimilado bien la lección del 68: una victoria de la fuerza sobre un reclamo democrático y de justicia social, es

un triunfo en el corto plazo pero una derrota en el largo plazo. Esto fue así en el 68 y lo sería ahora que la democracia y el reconocimiento de los derechos de las minorías históricamente discriminadas y explotadas, son la piedra de toque universal de la legitimidad de un gobierno y de un régimen.

La solución al actual desafío zapatista no está en combatirlo a sangre y fuego sino en hacer frente a sus demandas profundas, históricas. Un movimiento basado en el reclamo moral no puede ser exterminado. Si el zapatismo actual sucumbiera como el original, entonces como él regresaría, y el mito es siempre superior a sus enemigos...y a cualquier realidad que pretenda negarlo.